PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: HORACIO VITE TORRES
COLABORÓ: JORGE ALVAR CONTRERAS SEGURA

En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: **“PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”**¹, a continuación, se hace público el fragmento del proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 797/2023, en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad respectivo:

27. **Problemática jurídica por resolver.** En atención a que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento de la revisión reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para conocer del tema de constitucionalidad subsistente, relacionado con la constitucionalidad del artículo 195, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a esta Primera Sala verificar su regularidad constitucional, en función de la siguiente pregunta:

¿El artículo 195, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, dignidad personal y acceso efectivo a la justicia?

28. La respuesta a esta pregunta es en sentido **negativo**. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los agravios formulados por la parte recurrente son **infundados**, razón por lo cual procede confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.
29. Para justificar lo anterior, la metodología que se seguirá en este asunto consistirá en analizar los siguientes temas para pronunciarnos sobre la totalidad de los argumentos y resolver el caso: **(1)** Análisis del derecho humano de acceso efectivo a la justicia; **(2)** Desarrollo de la doctrina

¹ Jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página: 61.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

constitucional sobre la justicia restaurativa; **(3)** La figura de la suspensión condicional del proceso en el Código Nacional de Procedimientos Penales; y **(4)** Análisis sobre la constitucionalidad del artículo 195, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

(1) Análisis del derecho humano de acceso efectivo a la justicia

30. El derecho humano de acceso efectivo a la justicia se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política del país, que expresamente señala:

“Artículo 17.

[...]

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]”

31. Dicha porción normativa guarda correspondencia con los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos² y 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³, los cuales reconocen a favor de las personas el acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver sus conflictos.
32. Al emitir la jurisprudencia **42/2007**, esta Primera Sala señaló que la **tutela jurisdiccional** puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, **para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales**, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través

² **Convención Americana sobre Derechos Humanos.**

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. [...]

³ **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

Artículo 14.

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. [...]

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

de un proceso en el que **se respeten ciertas formalidades**, se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso, se ejecute esa decisión.⁴

33. Asimismo, al emitir la jurisprudencia **103/2017**, esta Primera Sala determinó que **el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas**, a las que corresponden tres derechos que lo integran: **(a)** una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; **(b)** otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, **(c)** una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.⁵
34. De igual forma, en la jurisprudencia **90/2017**, estableció que es perfectamente compatible con el orden constitucional, que **el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos**, cada uno de los cuales **tendrá diferentes requisitos de procedencia** que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional.⁶
35. Dentro de esas condiciones pueden establecerse, por ejemplo, aquellas que regulen: **(i)** la admisibilidad de un escrito; **(ii)** la legitimación activa y pasiva de las partes; **(iii)** la representación; **(iv)** la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; **(v)** la competencia del órgano ante el cual se promueve; **(vi)** la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, **(vii)** la procedencia de la vía.⁷
36. Además, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia **98/2014** concluyó que el reconocimiento del derecho de acceso a la impartición de justicia en los artículos 1º y 17, de la Constitución

⁴ Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2007, Tomo XXV, pág. 124, número de registro 172759. De rubro: **“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”**

⁵ Jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, pág. 151, número de registro 2015591. De rubro: **“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.”**

⁶ Jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, página 213, número de registro 2015595. De rubro: **“DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.”**

⁷ *Idem.*

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

Política del país, y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, **no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales.**⁸

37. Igualmente estableció que tal proceder equivaldría a que los órganos jurisdiccionales inobservaran los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provocaría incertidumbre jurídica, pues se desconocería su forma de proceder y se trastocarían las condiciones procesales de las partes en el juicio.⁹
38. Así pues, lo relevante en cada caso es que para garantizar un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, acorde con los requisitos legales correspondientes a cada acción y durante el proceso, **debe verificarse la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios** para que las personas puedan ejercer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales.

2) Desarrollo de la doctrina constitucional sobre la justicia restaurativa

39. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en cuanto a este tema al resolver la contradicción de tesis **220/2016**¹⁰ y los amparos en revisión **100/2021**¹¹ y **244/2022**¹² asuntos en los que expuso los antecedentes, fundamento constitucional, finalidad y características esenciales sobre la **justicia restaurativa**.
40. En dichos precedentes esta Primera Sala refirió que a partir de la **reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el**

⁸ Jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 909, número de registro 2007621. De rubro: **“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.”**

⁹ *Idem.*

¹⁰ Resuelta en sesión correspondiente al día uno de febrero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo del asunto.

¹¹ Resuelto en sesión correspondiente al día uno de diciembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (Ponente) y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat.

¹² Resuelto en sesión correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, por unanimidad de cuatro votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, y de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente). Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

dieciocho de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo los elementos que definen la manera en que se administra justicia.

41. Se señaló que con dicha reforma el poder constituyente no sólo modernizó el procedimiento penal, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación¹³; sino que también introdujo la **justicia restaurativa** y con ello creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los **mecanismos alternativos**, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio.
42. En ese sentido, se precisó que el artículo 17, quinto párrafo, de la Constitución Política del país, en lo que aquí interesa, establece:

“Artículo 17.

[...]

Las leyes preverán **mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.**

[...]”

(Énfasis agregado).

43. De acuerdo con lo anterior, se destacó que, con la reforma constitucional referida, ahora la justicia restaurativa y la retributiva coexisten en el sistema penal acusatorio.
44. Se consideró que la **justicia retributiva**¹⁴ significa infligirle a la persona imputada un daño a través de una pena, en especial, la privación de su libertad como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así el Estado reacciona en contra de los gobernados que cometan delitos.

¹³ **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [...]

¹⁴ ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, págs. 81 a 85.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

45. En este sentido, el legislador es quien determina a través de las normas sustantivas penales el castigo que la persona imputada debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de ella.
46. En cambio, la **justicia restaurativa**¹⁵ implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que la persona imputada repare el daño que ha causado, sin declararlo “culpable” e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. No deja de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión.
47. Ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo.
48. Con base en lo expuesto, se afirmó que a primera vista podría sustentarse que la justicia retributiva y la justicia restaurativa son opuestas, y que, por tanto, los caminos que se enfilan hacia uno u otro extremo necesariamente persiguen objetivos encontrados. Sin embargo, aunque esta idea es útil para fijar bien los extremos de justicia que cada una busca en materia penal ocurre que los caminos no persiguen exclusivamente un tipo de justicia, tan sólo tienen por regla general un orden de prioridades invertidas.
49. Por lo tanto, se destacó que en buena medida los caminos desembocan en una justicia mixta, con parte de retribución y con parte de restauración. La razón parece clara: la reparación del daño se ha posicionado como principal objetivo de la justicia penal, pero no es el único. De manera que, el juicio debe buscar la reparación del daño, pero también imponer una pena y en este camino, ésta es prioridad.
50. Así, los mecanismos alternativos deben procurar la reparación del daño y para lograrlo, si es necesario, se prescindirá de la pena, como ocurre en la

¹⁵ GORDILLO SANTANA, L.F., La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, Ed. Iustel, Madrid, 2007, págs. 39-45; y CHRISTIE, “Conflicts as Property”, British Journal of Criminology, vol. 17, núm. 1, 1976.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

suspensión condicional del proceso, pero no siempre o al menos no de toda la pena, como en el procedimiento abreviado.

51. Así, determinó que los procesos de justicia restaurativa se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso en donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Fiscal) como la autoridad decisora (persona juzgadora).
52. Los beneficios inmediatos hacia los partícipes (reparación del daño para la víctima y para la persona imputada evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad) no es el único efecto relevante, pues no se llega al extremo de considerarse un asunto privado y eso explica la necesidad de la intervención del Estado que conserva un rol significativo porque: a) establece el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos; b) decide qué casos pueden ser encausados; c) supervisa la legalidad en los procesos; y d) vela por el cumplimiento de los acuerdos.
53. En cambio, la decisión de participar en un proceso restaurativo, a qué tipo de acuerdo va a llegar y algunas veces incluso la forma en la cual el proceso restaurativo será conducido, son decisiones exclusivas de las partes.
54. Con base en lo expuesto, en dichos precedentes, se arribó a las siguientes conclusiones:
 - a) La reforma constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y por supuesto, en materia penal a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio.
 - b) Aunque la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal de la persona imputada y la imposición de una pena de prisión; su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

- c) Se sustenta en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Fiscal) como la autoridad decisora (persona juzgadora).
- d) Los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y de la persona imputada de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione.
- e) Los beneficios inmediatos hacia los partícipes, reparación del daño para la víctima y para la persona imputada evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad, no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables.
- f) El tránsito del conflicto penal por medio de mecanismos alternativos de solución servirá para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

55. En esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también resolvió la contradicción de tesis **141/2021**,¹⁶ en la que indicó que a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se implementó en nuestro país el sistema penal acusatorio y oral, en el que, entre otras cosas, se incorporaron formas alternas de solución de controversias al establecerse en el párrafo quinto del artículo 17 constitucional que las leyes los preverán.

56. Además, puntualizó que la incorporación de esas formas alternas de solución de controversias se justificó sobre la base de que en nuestro país se identificó

¹⁶ Resuelta en la sesión correspondiente al día tres de noviembre de dos mil veintiuno, por mayoría de tres votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (Ponente) y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de los emitidos por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat (Presidenta). El Ministro Pardo Rebolledo indicó que deja su proyecto original como voto particular, al cual se sumó la Ministra Ríos Farjat.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

el empleo de recursos públicos en persecuciones penales extensas, costosas y de muy cuestionable interés para la seguridad pública.

57. Al respecto, afirmó que en el ámbito penal se decía que se rigen por una legislación violatoria de derechos humanos, como el de presunción de inocencia, al permitir juzgar a los gobernados privados de su libertad en la mayoría de los casos y en las que, en muchas ocasiones, el pago de la reparación del daño a cargo de la persona sentenciada queda sin cumplimentarse.
58. En ese sentido, se expuso que las medidas alternas de solución de conflictos se consideraron como un punto de partida para fomentar la educación para la no violencia en los diferentes sectores de la sociedad y la resolución sana de conflictos, que propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.
59. Lo anterior, porque con su implementación se consideró que podrían alcanzarse finalidades específicas y esenciales, como son:
 - a) Evitar el riesgo de colapsar a las instituciones ante las exigencias legales y administrativas que implica el modelo de justicia, en tanto permiten despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
 - b) Incrementar la eficiencia y racionalidad en la aplicación de recursos públicos para la persecución de los delitos, disminuyendo los costos, tanto para el sistema de justicia como para las partes involucradas, al centrar las capacidades institucionales en la investigación y persecución de ciertos delitos.
 - c) Garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita, al agilizar el desempeño de los tribunales en la solución de conflictos.
60. En el precedente mencionado se sostuvo que de acuerdo con el proceso legislativo en comento, la promoción de mecanismos alternos de solución de controversias en muchas ocasiones resultan más apropiados para los fines de la justicia, que la imposición de una pena de prisión, al restituir a la persona agraviada en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

quebrantado por medio de la restitución y no de la represión, por lo que la instancia penal debería ser la última a la que se recurra.

61. Todo ello, se reiteró que era en el entendido de que la procedencia de la figura jurídica indicada siempre debería estar condicionada a que se garantice la reparación del daño, se sujete su cumplimiento a supervisión judicial de ser necesario y se trate de ciertos delitos.

(3) Análisis de la figura de la suspensión condicional del proceso en el Código Nacional de Procedimientos Penales

62. En el citado amparo en revisión **244/2022**,¹⁷ esta Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la suspensión condicional del proceso es una forma de **solución alterna del procedimiento** que el legislador ordinario dispuso que debe entenderse como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por la persona imputada, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento de la persona imputada a una o varias de las condiciones que garanticen una tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido, y que en caso de cumplirse, dará lugar a la **extinción de la acción penal**.¹⁸
63. Los **requisitos de procedencia** de la suspensión condicional del proceso son los siguientes:
- a) Que lo solicite el Ministerio Público o la persona imputada;
 - b) Que el auto de vinculación a proceso de la persona imputada se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años;
 - c) Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido;
 - d) Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en

¹⁷ *Vid., supra* nota 12.

¹⁸ **Código Nacional de Procedimientos Penales.**

Artículo 191. Definición

Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

su caso, con la excepción de que la persona imputada haya sido absuelta en dicho procedimiento; y

- e) Que no se trate de los delitos de contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable, así como expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.¹⁹

64. Sobre el plan de pago relativo a la reparación del daño y las condiciones que debe cumplir el imputado durante el periodo de suspensión condicional del proceso, en el Dictamen de la Cámara de Senadores que fungió como origen, se dio cuenta de los motivos que generaron esa previsión en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se destacó lo siguiente:

“Suspensión Condicional del Proceso. Con el objetivo de contribuir de igual manera a garantizar una respuesta justa y efectiva ante la comisión de un delito y entendiendo que no necesariamente un juicio o una sentencia puede lograr de forma integral ser la solución a la pluralidad de circunstancias que se presentan en el ámbito penal, la posibilidad de que en ciertos casos se pueda poner a prueba al imputado a fin de que cumpla con ciertas condiciones y genere un plan de reparación del daño, con el incentivo de que en caso de cumplirlas se terminará el proceso, es una forma no solo de racionalizar los recursos del Estado sino de contribuir a una solución de calidad tanto para la víctima como para el imputado.

En este sentido, la suspensión condicional del proceso es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado a

¹⁹ **Artículo 192.** Procedencia

La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:

- I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años;
- II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y
- III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso.

Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento.

La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código.

Artículo 167. Causas de procedencia [...]

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera:

- I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados;
- II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y
- III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

través de su defensor que contiene **un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento a una o varias de las condiciones que refiere este Código, que justifiquen, una efectiva tutela de los derechos procesales de la víctima y que en caso de cumplirse, permite la extinción de la acción penal.**

Su procedencia se limita, a los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena no exceda de cinco años, el imputado no haya sido condenado por delitos dolosos, no tenga o haya tenido otro proceso bajo suspensión condicional y no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido.” (Lo resaltado es de esta Primera Sala)

65. Por otro lado, debe decirse que la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse, **una vez dictado el auto de vinculación a proceso, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura del juicio.**²⁰
66. Con el propósito de resolver sobre dicha solicitud la persona titular del juzgado de control celebrará una audiencia en la que la persona imputada deberá plantear un plan de reparación del daño causado por la comisión del delito que se le atribuye y el plazo para cumplirlo.
67. Por su parte, el Ministerio Público, la víctima o la ofendida podrán **proponer condiciones a las que consideran debe someterse la persona a quien se atribuye el delito**²¹. No obstante, la inasistencia de la víctima u ofendida no impedirá que el órgano jurisdiccional resuelva sobre la procedencia y los términos de la solicitud.²²
68. Así, previo a la celebración de dicha audiencia, el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si la persona imputada anteriormente fue parte en algún mecanismo de solución alterna o si suscribió algún acuerdo

²⁰ **Artículo 193.** Oportunidad

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos.

²¹ **Artículo 194.** Plan de reparación

En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso [...] Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

²² **Artículo 196.** Trámite

La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

reparatorio, cuyo resultado se deberá agregar a los registros de la causa penal e informar en la audiencia correspondiente.²³

69. Entre las condiciones que de manera enunciativa señala el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran las siguientes: **(i)** residir en un lugar determinado; **(ii)** abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; **(iii)** aprender una profesión u oficio; **(iv)** prestar un servicio social; **(v)** someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; **(vi)** tener un trabajo o empleo; y **(vii) Cumplir con los deberes de deudor alimentario.**
70. Con independencia de lo anterior, la persona juzgadora puede disponer que la persona imputada sea sometida a una evaluación previa y fijar cualquier otra condición que, a su juicio, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima.²⁴
71. Una vez que las partes han manifestado su avenencia para acceder a la forma de solución alterna, en su resolución, el órgano jurisdiccional **fijará las condiciones bajo las cuales se rechaza la solicitud o se suspende el procedimiento y aprobará el plan de reparación propuesto**, mismo que podrá modificar en la misma audiencia. El plazo que fije el juzgado de control

²³ **Artículo 200.** Verificación de la existencia de un acuerdo previo

Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos.

²⁴ **Artículo 195.** Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso [...]

I. Residir en un lugar determinado;

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones;

V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control;

VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;

VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas;

VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;

IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control;

X. No poseer ni portar armas;

XI. No conducir vehículos;

XII. Abstenerse de viajar al extranjero;

XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o

XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima.

Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

para la suspensión condicional del proceso **no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años.**

72. El juez de control **podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más** del término establecido en su primera determinación, extensión que solo se puede decretar **en una ocasión.**
73. La información obtenida como producto de la suspensión condicional, como el informe previo sobre la persona imputada o la aceptación de los hechos para acceder a la solución alterna, no podrán ser utilizadas en caso de continuar con el proceso penal.
74. No obstante, cuando se conceda dicha solución alterna, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficiencia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso.²⁵
75. Los efectos de la suspensión condicional del proceso cesarán cuando el plan para la reparación del daño y las condiciones de la suspensión del proceso se hubieran cumplido dentro del plazo establecido para tal efecto, sin que se hubiese revocado, por lo que se **extinguirá la acción penal** y el juzgado de control deberá decretar, de oficio o a petición de parte, el **sobreseimiento de la causa penal.**
76. El desarrollo voluntario, pero de cumplimiento condicionado se ve protegido para garantizar la continuación del ejercicio de la pretensión punitiva estatal, porque **la suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal.**²⁶

²⁵ **Artículo 195.** Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir [...]

Artículo 196. Trámite

La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal.

Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba

En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso.

Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso

[...] El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. [...]

²⁶ **Artículo 199.** Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso

La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate.

Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

77. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo para tal efecto **se interrumpirán mientras la persona imputada esté privada de la libertad por otro proceso** diverso a aquel en el que se solicitó la solución alterna.
78. Si la persona imputada **obtiene su libertad en el otro proceso antes del auto de apertura a juicio**, entonces las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo establecido para su cumplimiento **se reanudarán**.
79. Por otra parte, si la persona imputada goza de su libertad, aun cuando se encuentre sometida a otro proceso penal, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para su cumplimiento, continuarán vigentes, lo que no implica la interrupción de la suspensión condicional del proceso.
80. No obstante, en este supuesto no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad en la causa penal diversa al procedimiento en curso.²⁷
81. Por último, se debe precisar que la suspensión condicional del proceso **tiene la finalidad de paralizar el trámite del procedimiento penal, con el objeto de que se repare el daño ocasionado a la víctima u ofendida sin que sea necesaria una sentencia de condena**, por lo que la interrupción de la suspensión implicaría la continuación del procedimiento, esto es, que se siga la secuela procesal, en su caso, hasta el dictado de una sentencia.
82. La **revocación** de la suspensión condicional del proceso se tramita a petición del Ministerio Público, de la víctima o de la parte ofendida.

establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento.

²⁷ **Artículo 198.** Revocación de la suspensión condicional del proceso

[...] Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

83. Procede revocar la solución alterna: **a) si la persona imputada deja de cumplir injustificadamente con las condiciones impuestas**; **b)** cuando no cumpla con el plan de reparación; o **c)** si posteriormente fuera condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esa misma naturaleza.
84. Para resolver sobre la revocación de la suspensión condicional del proceso el juzgado de control convocará a las partes a una audiencia en la que debatirán sobre su procedencia, debiendo resolver de inmediato lo que en derecho corresponda.
85. Si la víctima o la ofendida hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta fuera revocada con posterioridad, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberá ser destinado a la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda en favor de la víctima u ofendida.²⁸
86. La revocación de la suspensión condicional del proceso trae como consecuencia que no se pueda extinguir la acción penal y la continuación del proceso hasta la eventual sentencia.²⁹

(4) Análisis sobre la constitucionalidad del artículo 195, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

87. Ahora bien, expuesta la doctrina de este Máximo Tribunal sobre los tópicos que convergen para la decisión de este asunto, es importante traer a colación el contenido del artículo impugnado.

²⁸ **Artículo 198.** Revocación de la suspensión condicional del proceso

Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. [...]

Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. [...]

²⁹ **Artículo 199.** Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso

[...] Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

88. Así, el quejoso impugnó el contenido del artículo 195, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que literalmente establece lo siguiente:

“Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso

El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan:

[...]

XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o

[...]

(Énfasis añadido)

89. En el caso en concreto, el quejoso argumenta que la disposición normativa impugnada viola en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, dignidad personal y acceso pleno a la justicia, al establecer la posibilidad de imponer como condición el *cumplir con las obligaciones de deudor alimentario* para acceder a la suspensión condicional del proceso, lo cual, a su juicio, *es equivalente a la imposición de una pena*.
90. Así las cosas, esta Primera Sala estima que contrario a lo que asevera el quejoso y tal como lo determinó el Juzgado de Distrito, dicha porción normativa **no** atenta contra los derechos fundamentales que se encuentran insertos dentro del artículo 1º, 14 y 17 constitucionales.
91. En efecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la condición en estudio contenida en la fracción XIII, del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario, no puede ser considerada como una pena, impuesta sin previo juicio, pues precisamente el objetivo del mecanismo de salida alterna lo que persigue es que, si el imputado cumple con todas las condiciones que se le fijen, sea innecesario seguir un proceso penal en su contra y por ende la imposición de sanciones.
92. Ello, en atención al carácter restaurativo que reviste el mecanismo de suspensión condicional del proceso, en contraposición del carácter retributivo que representa la imposición de una pena.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

93. Así, por un lado, tenemos que la pena como efecto o consecuencia jurídica del delito cometido, no es una medida preventiva o *ante delictum*, sino una sanción *retributiva* o *post delictum*.³⁰ Es decir, la pena se establece como un castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico,³¹ el cual, necesariamente debe ser producto de un proceso penal previo en el que se cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento.
94. Por el contrario, a través de la naturaleza restaurativa de los mecanismos alternativos de solución de controversias se pretende que las cosas vuelvan al estado previo a la comisión del delito. Se busca que la persona acusada repare el daño causado sin ser declarada "culpable" ni recibir una sanción en estricto sentido.
95. Lo anterior es congruente con la *ratio* de la suspensión condicional del proceso, pues, su procedencia **está sujeta a la voluntad y aceptación del imputado**, quien busca, efectivamente, una solución alterna a la controversia que evite la imposición de una sanción y su eventual cumplimiento.
96. Por esto, el cumplimiento de los deberes de deudor alimentario constituye una condición para la suspensión del proceso que no puede equipararse a una pena, pues no deriva de una sentencia condenatoria pronunciada en un proceso penal, sino inicialmente de la propia ley civil aplicable y después de una forma alterna de solución a controversias en materia penal que surge de la voluntad del imputado de cumplir con ella, lo que implica, se insiste, que no es impuesta de manera coactiva u obligada, pues las condiciones que en su caso imponga el juzgador están sujetas a la aceptación o acuerdo de aquél.
97. Asimismo, no debe perderse de vista que la imposición de la condición tiene una temporalidad definida, después de la cual, se extingue la acción penal y con ello el cumplimiento de las condiciones impuestas, desde luego sin que ello prejuzgue sobre la comisión de un diverso hecho considerado como delito, si el imputado incurre en incumplir con sus obligaciones alimentarias.
98. Así, dicho requisito solo constituye una condición de efectividad para que el sentenciado pueda acceder a un mecanismo alterno de solución de la

³⁰ FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 10ª ed., Trotta, Madrid, 2011, págs. 368 a 369.

³¹ CASTELLANOS TENA, Fernando y SÁNCHEZ SODI, Horacio, Lineamientos elementales de derecho penal. Parte general, 56ª ed., Editorial Porrúa, México, 2022, págs. 343 a 365.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

controversia penal, cuyo objetivo es que se restaure la afectación generada a quien resintió la conducta ilícita mediante el pago de la reparación del daño, a la luz del derecho humano establecido en favor de la víctima u ofendido, a cambio de que el imputado no enfrente una sanción, pues su concesión y posterior cumplimiento, conlleva a una renuncia a la potestad punitiva del estado.

99. Además, en criterio de esta Primera Sala, la condición en estudio contenida en la fracción XIII, del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales **favorece la tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido y obedece a la libertad configurativa del legislador de establecer requisitos de procedencia para cualquier procedimiento.**
100. En este sentido, debe destacarse que, conforme al diverso 191 del citado Código Nacional, el plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y las condiciones a cumplir por parte del imputado deben justificar una efectiva tutela de los derechos procesales de la víctima u ofendido, una concientización del activo del daño ya causado, que en el caso concreto, se traduce en **la protección del derecho a recibir alimentos que le asiste al acreedor alimentario.**
20. En efecto, como lo determinó esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 1329/2020,³² aun tratándose de medios autocompositivos, si los jueces de control y el Ministerio Público no desempeñan diligentemente su deber de verificar las obligaciones pactadas y el cumplimiento del convenio, entonces se configura una omisión estatal de salvaguardar el derecho a la reparación integral del daño de las víctimas u ofendidos. Debido a que las partes no son peritos en la materia y a la sensibilidad de los bienes jurídicos en juego, las autoridades del proceso son las encargadas de vigilar que las negociaciones sean justas, proporcionales, en igualdad de condiciones y con un efecto reparador para los afectados, específicamente tratándose de grupos que cuentan con una protección constitucional reforzada.

³² Resuelto en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintidós por unanimidad de votos, por unanimidad de cinco votos de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones y se reservó el derecho a formular voto concurrente, y de los señores Ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat, quien está con el sentido pero se aparta de consideraciones.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

21. En este sentido, esta Suprema Corte ha establecido específicamente el carácter del Ministerio Público como el órgano obligado a intervenir en los juicios en los que se involucren derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que puede promover de oficio las medidas que sean necesarias para salvaguardar sus derechos e incluso promover medidas tuitivas, especialmente si pudieran existir intereses conflictivos con sus representantes legales³³.
101. Además, los menores afectados dentro de un procedimiento penal cuentan con un interés especial más allá del que les corresponde a sus representantes de otorgar el perdón o la extinción de la acción penal, en reconocimiento de su dignidad humana y a la importancia de no sufrir una revictimización. Específicamente a lo anterior, las y los juzgadores deben asegurarse de que la extinción de la acción penal no ocasione una victimización mayor que la que supone acudir a los tribunales y la substanciación del procedimiento, de acuerdo con las particularidades del caso³⁴.
102. Por otro lado, la norma impugnada, contrario a lo que afirma el quejoso, no autoriza al Juez de Control, asumir competencias que corresponden a un juez de lo familiar en un procedimiento civil, ya que dicha condición para acceder a la suspensión condicional del proceso, de ninguna manera constituye una condena en la que previamente se hayan analizado pruebas ofertadas por las partes, sino que es un acuerdo entre aquellas aprobado por el juzgador en el que, el imputado o acusado se compromete libremente a resarcir el daño causado por el hecho materia de imputación, es decir, con ello no se regulan situaciones u obligaciones futuras, sino que se establece en su caso, un compromiso de pago periódico de lo ya adeudado y el cumplimiento posterior, mientras dura la suspensión condicional del proceso de esa obligación.
103. Ahora bien, cabe destacar que si bien es cierto el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias es de naturaleza omisiva y de carácter permanente o continuo, en la medida en que su consumación se prolonga en el tiempo. Esta prolongación, sin embargo, debe limitarse en el sistema penal oral, al periodo que será materia de investigación porque, precisamente, el Ministerio Público debe desarrollar su labor investigadora sobre un hecho y temporalidad determinados.

³³ *Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, noviembre de 2021, pp.110-111.

³⁴ *Ibid.*, p. 111-112.

AMPARO EN REVISIÓN 797/2023

104. En ese sentido, la investigación sobre el delito de incumplimiento de obligaciones mencionado, para efectos del proceso penal, comprende desde el momento en que comenzó la omisión de cumplir con los alimentos hasta que el Ministerio Público formula la imputación, en virtud de que los hechos que constituyen el delito siempre deben ser anteriores y a partir de la formulación de la imputación se da a conocer al imputado el hecho que será materia de investigación y, eventualmente, materia de prueba en el juicio oral.
105. De manera que la condición de cumplir con los deberes alimentarios para la procedencia de la suspensión condicional del proceso, tratándose del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, debe atender a lo que fue materia de imputación y que dio origen al dictado del auto de vinculación a proceso, de ninguna manera podrá, como lo pretende creer el quejoso, abarcar actos posteriores o futuros, que de existir, serán materia de un diverso procedimiento penal; en ese contexto, es que la norma impugnada de ninguna manera otorga al Juez de Control una competencia que no le corresponde y por ende no infringe el derecho de legalidad y seguridad jurídica del imputado.
106. Así, el Juez de Control no está resolviendo una controversia de fondo determinando la responsabilidad penal del imputado, ni mucho menos fijando las obligaciones alimentarias del mismo y su monto, ya que carece de competencia para hacerlo, sino que está resolviendo previo acuerdo y aceptación de las partes, sobre la procedencia de la suspensión condicional del proceso, estableciendo una condición de salvaguarda de la subsistencia de un grupo vulnerable, verificando que se cumplan con los requisitos exigidos por la norma y velando en todo momento por el respeto y protección de los derechos humanos de las partes, específicamente el de reparación del daño para las víctimas de un hecho ilícito.
107. Por lo tanto, esta Primera Sala estima que fue correcta la determinación del Juez de Distrito, al sostener que dicha disposición normativa no es inconstitucional y, como consecuencia, lo procedente es **confirmar** en este aspecto la sentencia recurrida.